

# Leyendo el Diario Oficial

Abril

## Reflexiones

El *Diario Oficial* continúa con su atraso invergado, informándonos oficialmente con retraso de meses, de las actuaciones del Estado, violando así “a diario” la Constitución.

En el período que comentamos destacamos tres decretos legislativos que nos muestran con claridad meridiana el “trasfondo político” de toda ley. El gobierno con su programa de neoliberalización de la economía y de “democratización” de la sociedad, nos trae la incorporación de El Salvador al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), que junto a otras medidas, en anteriores ocasiones comentadas, como el ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) pone al país, aún más, en el flujo de la corriente capitalista que domina la escena mundial actual.

Dentro de las grandes jugadas del “ajedrez mundial” de la política y de la economía, El Salvador toma la posición que los intereses externos le asignan, mientras sus clases gobernantes aceptan “la miga” que les corresponderá en el acuerdo. Dentro de las controversias y afirmaciones económicas se sostiene que la inversión extranjera es “el camino” para el desarrollo de los pueblos.

Por otro lado, desde la perspectiva interna, el Instituto “Libertad y Progreso” queda encargado de calificar como proyectos de interés social, para un trámite privilegiado de inscripción en el Regis-

tro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, a través de la Unidad de Registro Social, a aquellos que permitirán convertir a El Salvador en “un país de propietarios”; aunque la única propiedad —y no siempre estable ni segura— a que muchos pueden aspirar en el país, es a la de su “medio metro de tierra” al final de sus días.

Finalmente, el *Diario Oficial* nos trae la largamente discutida serie de propuestas de reforma a la Constitución de la República, que vendrían a ser como “la ganancia política” del FMLN y de la sociedad salvadoreña, tras una larga y cruenta guerra que ha llegado a perder buena parte de su sostén ético-racional por el “empate crónico de fuerzas”, y por las violaciones constantes a los derechos humanos; y buena parte de su sostén internacional, por el entendimiento entre los máximos exponentes de la política mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, debido a factores que no es del caso analizar.

Las susodichas propuestas de reforma constitucional que en estos días se afirma comenzarían a ser discutidas para su ratificación en los próximos meses por la nueva asamblea son el fruto de los acuerdos políticos que el proceso de paz y de negociación ha generado; y tocan temas vitales estrechamente relacionados entre sí: el de la Fuerza Armada —que algunos comandantes preferirían suprimir, pero que se encuentra firme y armadamente enraizada en la vida política e institucional del país—, el del Organo Judicial y del Consejo

Nacional de la Judicatura, el del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el del Tribunal Supremo Electoral.

A la Fuerza Armada o a algunos de sus miembros o "tandas" se los ha señalado reiteradamente en el pasado como participantes de fraudes electorales; e incluso por ella misma, en la Proclama de la Fuerza Armada de 1979, como participantes en violaciones de los derechos humanos y gozando de impunidad ante un Organismo Judicial, al cual los mismos cuerpos de seguridad "le sirven" como "órganos auxiliares de la administración de justicia", y al que sostiene un engranaje político institucional, conformado por décadas de goce del poder. Por ello, a la Fuerza Armada se le separan los cuerpos de seguridad, que dependerán de un ministerio diferente al de Defensa, bajo el nombre de Policía Nacional Civil; se crea al Organismo de Investigación del Delito bajo la dirección de la Fiscalía General de la República, y se constituye al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que tiene entre sus varias atribuciones la de "investigar de oficio o por denuncia casos de violaciones a los derechos humanos" y la de "promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos".

Y por ello, se reforman al Organismo Judicial, a nivel de Corte Suprema de Justicia y de jueces de paz, es decir, de arriba a abajo, y se le dan más atribuciones al Consejo Nacional de la Judicatura, en cuanto a propuestas de los miembros del Organismo Judicial: desde los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta los jueces de paz. Se procura la independencia del Organismo Judicial, asignándole un porcentaje mínimo de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Y, finalmente, se amplía y reforma al Consejo Central de Elecciones.

Habrà que reconocer que las reformas, aunque no sean "ideales", constituyen un progreso en la fortificación del "poder civil" ante el poder militar.

## Organismo Legislativo

### El Salvador se adhiere al Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones

Por el Decreto legislativo Nº 737, del 5 de abril del corriente año, la asamblea legislativa ratificó el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, firmado como adherente por El Salvador, en Washington, el 12 de marzo del presente año.

Por dicho convenio, presentado a los gobiernos de los estados miembros del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) por su junta de gobernadores, el 11 de octubre de 1985, quedó abierto a todos los miembros del banco y a Suiza el Organismo o Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), por él creado, cuyo fin es "propiciar el flujo de inversiones para fines productivos entre los países miembros, y en especial hacia los países miembros en desarrollo, complementando de esta manera las actividades del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de la Corporación Financiera Internacional y otras instituciones internacionales de financiamiento del desarrollo". Para tal fin, "otorgará garantías, incluidos los seguros y reaseguros, contra riesgos no comerciales respecto de inversiones realizadas en un país miembro y provenientes de otros países miembros"; riesgos tales como los provenientes de la transferencia de moneda, la expropiación y medidas similares, el incumplimiento de contrato por el gobierno receptor de la inversión, la guerra y los disturbios civiles. Asimismo realizará todas las "actividades complementarias apropiadas para promover el flujo de inversiones hacia los países miembros en desarrollo y entre los mismos".

El Salvador, como parte de sus obligaciones al incorporarse como miembro del Organismo Multilateral, invertirá 1,320,040 millones de dólares en la adquisición de acciones del mismo (*Diario Ofi-*

cial, Nº 67, Tomo 311, 15 de abril de 1991, pp. 2-5).

### **Créase la Unidad de Registro Social dentro del Registro de la Propiedad Raíz**

Por el Decreto legislativo Nº 734, del 5 de abril de 1991, se dio la "Ley de Creación de la Unidad del Registro Social de Inmuebles" por la cual se creó la referida unidad como integrante del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, dependencia a su vez del Ministerio de Justicia. Dicho "Registro Social", que funcionará con independencia de las otras unidades del registro, es, según los considerandos del decreto, un "mecanismo necesario... para brindar en forma rápida y segura el reconocimiento legal de los derechos de propiedad de los sectores sociales, rurales y urbanos, menos favorecidos del país". Tendrá su sede en la ciudad capital y podrá establecer otras oficinas registrales en el territorio nacional "cuando esto sea conveniente". Además, procurará la inscripción y publicidad de los derechos sobre los inmuebles en los que se desarrollen "proyectos de interés social". Por éstos se entenderán "aquellos que beneficien a personas de escasos recursos que habiten en tugurios y zonas marginales, lotificaciones desarrolladas sin autorización, proyectos de vivienda o lotes con servicios urbanos y rurales (y) lotificaciones rurales desarrolladas por el ISTA y FINATA".

La Ley de Creación de la Unidad del Registro Social de Inmuebles da un plazo máximo de sesenta días para la emisión del reglamento de la misma que contendrá el procedimiento registral, el cual "será breve y expedito" (*Diario Oficial*, Nº 73, Tomo 311, 23 de abril de 1991, pp. 1-4).

### **Acuerdos de reforma a la Constitución de la República**

Por los acuerdos 1 y 2, del 29 de abril del presente año, y el 3, del 30 de abril siguiente, la asamblea legislativa recién pasada, en vísperas de la instalación de la nueva asamblea legislativa, el 1 de mayo, aprobó una amplia serie de reformas constitucionales, las "primeras" se ha dicho, que no han tenido su origen en un "golpe de Estado" o más específicamente hablando, en un "golpe militar".

El Acuerdo Nº 1, el más amplio y sustancial de todos, reforma disposiciones constitucionales relativas a la Fuerza Armada, el Organo Judicial, el sistema electoral y los derechos humanos.

El Acuerdo Nº 2 amplía la pena de muerte que en la actual Constitución se encuentra limitada a "los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional", a los delitos de parricidio, asesinato, robo o incendio si se siguiere muerte —ya previstos en la Constitución de 1962—, y además, a los de violación y secuestro.

El Acuerdo Nº 2 también amplía la lista de funcionarios de elección popular mencionados por el artículo 80, inciso 1º, de la Constitución nacional, agregando a los diputados al parlamento centroamericano, cuyos primeros representantes salvadoreños fueron ya electos, en las recién pasadas elecciones de diputados y consejos municipales.

Finalmente, el acuerdo permite que los servicios de correos y telecomunicaciones, que actualmente "corresponde al Estado prestar", puedan ser prestados por particulares; aunque con la salvedad, al igual que todos los servicios públicos, de que puedan ser siempre tomados a su cargo por el Estado, "cuando los intereses sociales así lo exijan".

En Acuerdo Nº 3 no hace más que crear una disposición transitoria adicional relativa a la conformación del Primer Tribunal Supremo Electoral, en el cual estarán representados no sólo los tres partidos políticos o coaliciones que hayan obtenido el mayor número de votos en la última elección presidencial, como se propone en la reforma al artículo 208 de la Constitución nacional, sino, además, el cuarto partido o "coalición", es decir, concretamente hablando, la Convergencia Democrática". La razón de lo anterior, según el considerando II del Acuerdo Nº 3, es "que las actuales circunstancias que vive el país requieren de un mayor concurso de representantes de los distintos partidos políticos en el referido Tribunal Supremo Electoral, con el objeto de darle mayor confiabilidad al próximo proceso eleccionario sin desestimar la participación al menos, de un miembro independiente que garantice la imparcialidad del mismo organismo".

Se recordará que en las pasadas elecciones, la Convergencia Democrática disputó al partido de Conciliación Nacional el papel de "tercera fuerza política del país", sin que resultara del todo claro, políticamente hablando, que le correspondiera realmente a éste partido dicha posición.

En la propuesta de reforma al artículo 208 de la Constitución, el "Consejo Central de Elecciones" actual se convierte en "Tribunal Supremo Electoral" y pasa a constituirse con cinco magistrados, en lugar de tres "miembros". Los dos magistrados o miembros que se agregan serán elegidos de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia y "deberán reunir los requisitos para ser Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, y no tener ninguna afiliación partidista". El magistrado presidente será propuesto por el partido o coalición legal que haya obtenido el mayor número de votos en la última elección presidencial. En conclusión: el "Acuerdo de Reformas Constitucionales No. 3" propone, transitoriamente, para la próxima elección presidencial, un Tribunal Supremo Electoral con cuatro magistrados, en lugar de tres, propuestos por los partidos o coaliciones políticas, y un quinto magistrado, el único en lugar de dos, propuesto por la Corte Suprema de Justicia. Para estas próximas elecciones presidenciales, éste "ejercerá la presidencia del Tribunal", en lugar de magistrado propuesto por ARENA.

En cuanto al Acuerdo de reformas constitucionales Nº 1, el más amplio y sustancial de los tres acuerdos, se refiere a disposiciones constitucionales relativas a la Fuerza Armada, que ya es decir bastante; al Órgano Judicial —y al Consejo Nacional de la Judicatura—; al Sistema Electoral —y al Consejo Central de Elecciones—; y a los derechos humanos y su protección confiada a un procurador específico; entre otras disposiciones.

En cambio, los acuerdos 2 y 3 —si bien tratan temas importantes, como todos los de la Constitución— son de alcance menos general, como el Acuerdo Nº 2, relativo a la ampliación de la pena de muerte; del número de funcionarios de elección popular, entre los que se agregan los diputados al parlamento centroamericano; y los servicios de correos y telecomunicaciones, que podrían ser prestados también por particulares, según la refor-

ma, y la posibilidad de prorrogar el período de las concesiones dadas por el Estado para el establecimiento de obras materiales de servicio público.

En el Acuerdo Nº 1 se ve el claro objetivo de limitar o controlar a la Fuerza Armada. Así, aunque el acuerdo diga que se sustituye el artículo 30 de la Constitución nacional por otro, la realidad es que ha sido suprimido el artículo 30 de la Constitución actual, que da competencia a "tribunales militares especiales" para que, durante el estado de sitio o "suspensión de garantías constitucionales", conozcan de "los delitos contra la existencia y organización del Estado, contra la personalidad internacional o la personalidad interna del mismo y contra la paz pública, así como de los delitos de trascendencia internacional".

Estos delitos, que serán excluidos de la jurisdicción militar, están desarrollados en la "cuarta" y "quinta parte" del Libro Supremo del Código Penal bajo el nombre genérico de "Delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado" y "Delitos de Trascendencia Internacional". A modo de ejemplo, señalamos algunos tipos penales; "Asociaciones Subversivas", "Difusión a Propaganda de Doctrinas Anárquicas o Contrarias a la Democracia", "Tenencia de Material Subversivo", "Cooperación en Propaganda Subversiva", "Traición", "Revelación de Secretos de Estado", "Espionaje", "Sabotaje", "Rebelión", "Sedición", "Motín", "Actos de Terrorismo", "Tenencia ilícita de Armas de Fuego", "Delitos contra las leyes de guerra", etc.

Los juicios sobre los mencionados delitos, regidos por una ley especial de procedimientos, continúan bajo la jurisdicción militar especial, aunque se reestablezcan las garantías constitucionales. Todo esto quedaría suprimido por la reforma.

A la Fuerza Armada se le quita la función de "la seguridad pública", la cual se confía a una Policía Nacional Civil, "cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista", que estará adscrito a un ministerio diferente del de "la Defensa Nacional". El presidente de la república, sólo "excepcionalmente" podrá disponer de la Fuerza Armada "para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública" y a condición de que se



hayan agotado los medios ordinarios para mantenerlas.

Por otro lado, se establecen una serie de límites y garantías a esta actuación excepcional, la cual se reducirá "al tiempo y a la medida de lo estrictamente necesario para el reestablecimiento del orden", y "cesará tan pronto se haya alcanzado ese cometido". Para vigilar el cumplimiento de lo anterior, el presidente de la república deberá mantener informada a la asamblea legislativa sobre tales actuaciones. Esta, por su parte, "podrá, en cualquier momento, disponer el cese de tales medidas excepcionales" y "en todo caso dentro de los 15 días siguientes a la terminación de éstas, el presidente de la república presentará a la Asamblea Legislativa un informe circunstanciado sobre la actuación de la Fuerza Armada".

Al presidente de la república se le aumentan atribuciones y obligaciones, tales como las anteriores, y se le confiere la organización, conducción y mantenimiento de la Policía Nacional Civil, la cual actuará en la ciudad y en el campo "para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública", "con estricto apego al respeto a los derechos humanos y bajo la dirección de autoridades civiles".

De la Fuerza Armada se dice con toda claridad que "está subordinada a la autoridad del presidente de la república en su calidad de Comandante General". Y se agrega que "los órganos fundamentales del gobierno" —el legislativo, el ejecutivo y el judicial— "podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado, dentro de sus respectivas áreas constitucionales de competencia, para hacer cumplir esta Constitución".

Ya no se dirá más que "la organización y el desarrollo de las actividades de la Fuerza Armada estarán sujetos a leyes especiales", sino simplemente que "su estructura, régimen jurídico, doctrina, composición y funcionamiento son definidos por la ley". Ya sólo se hablará de los "reglamentos y las disposiciones especiales que adopte el presidente de la república".

Pareciera haber un intento para acabar, en la medida de lo posible, con la Fuerza Armada en-

tendida como un sector de "funcionarios y empleados públicos" especialmente privilegiados, y sujetos sólo a "leyes especiales".

De la Fuerza Armada se dice fundamentalmente que es "no deliberante", en lugar de no deliberante "en asuntos del servicio", en intento para acabar con la práctica de consultar a la Fuerza Armada una amplia serie de cuestiones, por parte de su "Comandante General". En definitiva, se ve el claro intento de afirmar al "poder civil" sobre el "poder militar", a través de la reforma legal.

Otra área importante de modificación la constituye el Organo Judicial, al que, como es sabido, se le destina la disposición anual "de una asignación no inferior al 6 por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado". En las "Disposiciones Transitorias" del acuerdo de reformas, se establece que esta "asignación presupuestaria se hará efectiva en forma gradual, progresiva y proporcional hasta su total cobertura, en un plazo no mayor de cuatro años contados a partir de la vigencia del decreto correspondiente".

Las líneas generales de la reforma al Organo Judicial son la de procurarle una mayor independencia y capacidad técnica; se aumenta a nueve años el actual período de cinco años de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes podrán ser reelegidos. Tanto para la elección como para la destitución que pudiera darse "por causas específicas previamente establecidas por la ley", se requerirán los dos tercios por lo menos de los diputados electos.

El Consejo Nacional de la Judicatura ve acrecentada su influencia: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberán ser elector "de una lista de candidatos que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determinará la ley", pero se aclara que la mitad de la lista de candidatos "provenirá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador y donde deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico.

Se integra a los jueces de paz a la carrera judicial, y se exige que sean abogados de la República, salvo "casos excepcionales" en que el Consejo Nacional de la Judicatura, que también podrá

proponer candidatos para estos cargos, presente candidatos "que no sean abogados"; pero en estos casos, "el período de sus funciones será de 1 año".

Es sabido que los jueces de paz tienen importantes funciones en la administración de justicia, por lo que es importante garantizar que sean personas capacitadas y no sólo "recomendadas" por determinado partido, las que desempeñen dichos cargos.

Al Consejo Nacional de la Judicatura se lo define como "una institución independiente", cuyos miembros serán elegidos por la asamblea legislativa "con el voto calificado de las 2/3 partes de los diputados electos". Bajo su responsabilidad se deja "la organización y funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial, cuyo objeto es el de asegurar el mejoramiento en la formación profesional de los jueces y demás funcionarios judiciales".

Las reformas sobre la Fiscalía General de la República establecen que ésta dirigirá "un organismo de investigación del delito", y la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De esta forma se completa el pa-

norama para una mejor administración de justicia y un mejor control de la fuerza dentro de la vida social.

Las modificaciones relativas al "Tribunal Supremo Electoral" y otras, han sido ya comentadas (*Diario Oficial*, Nº 78, Tomo 311, 30 de abril de 1991, pp. 1-7).

#### Voces constantes

— Incentivos fiscales	5
— Exenciones de impuestos	1
— Personas jurídicas autorizadas por el Ministerio del Interior (iglesias entre ellas)	10 3
— Personas jurídicas autorizadas por las alcaldías municipales	12
— Personas jurídicas autorizadas por el Ministerio de Agricultura	1
— Ampliación de servicios educativos y reconocimiento de directores	3
— Nuevas universidades o facultades	1
— Autorización de abogados	5
— Autorización de notarios	5